

**Determinantes de la capacidad estatal como componente para el alcance estatal en territorios inseguros: El caso de la política antidroga implementada en Monzón**

Frank Casas Sulca  
[casas.frank@pucp.pe](mailto:casas.frank@pucp.pe)

Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia  
Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas – CISEPA  
Pontificia Universidad Católica el Perú

Área Temática ALACIP:  
Participación, representación y actores sociales

“Trabajo preparado para su presentación en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 22 al 24 de julio de 2015.”

# **Determinantes de la capacidad estatal como componente para el alcance estatal en territorios inseguros: El caso de la política antidroga implementada en Monzón**

Frank Casas Sulca

## **Resumen**

Esta investigación estudia las determinantes de la capacidad estatal para controlar territorios inseguros, utilizando para ello un estudio de caso de la política de control de cultivo de coca ilícito en el valle del Monzón (Huánuco, Perú). Los hallazgos del estudio concluyen que el Estado puede alcanzar un margen de control en dicha zona cocalera debido a su capacidad para entregar parte del control de la política a ciertos grupos sociales (los campesinos cocaleros). Esto originó que los campesinos se alejen paulatinamente de aquellos grupos que defendían una postura radical de defensa del cultivo de coca. Son tres los factores que posibilitaron un campo de alianzas y negociación entre Estado y campesinos cocaleros: a) un cambio en la estrategia del Estado que permitió movilizar actores sociales a su favor; b) la defensa por parte de algunos campesinos cocaleros de algunas de las acciones del Estado; c) la permisibilidad tácita por parte del Estado para que algunos campesinos puedan beneficiarse de actividades no previstas en la intervención territorial. Este trabajo de campo se realizó entre julio de 2013 a diciembre de 2014 y se recogió información de primera mano de 21 actores que participaron en la dinámica de la política de control de coca ilícita; para ello se hizo uso de estrategias e instrumentos del método cualitativo.

**Palabras clave:** capacidad estatal, cocaleros, desarrollo alternativo, Monzón, Perú

---

## **1. Introducción: Los desafíos y desafiantes estatales del tráfico ilícito de drogas en Monzón.**

El Valle del río Monzón se encuentra ubicado en la provincia de Huamalíes perteneciente al eje selva alta del departamento de Huánuco, al oriente centro de la ciudad de Lima. Durante varios años dicho valle ha sido reconocido como una de las zonas más importantes de la cadena productiva de cocaína del país, concentrando aproximadamente casi el 80% del cultivo de planta de coca en toda la zona del Alto Huallaga. Así, aunque en Monzón se desarrollan todos los eslabones de la cadena productiva de la cocaína, en la práctica es el cultivo de coca ilícito el que representa el eje central de la dinámica económica de la zona.

Informes especializados en el tema han determinado cuando menos cuatro factores que explican la situación del valle del Monzón con referencia a la producción de cocaína. Primero, el boom del precio de la cocaína en el mundo (UNODC, 2014); segundo, la débil presencia del Estado en la zona (CVR, 2003); tercero, la rentabilidad de la producción de coca en comparación a otros cultivos (CICAD, 2014; O'Connor, 2009); y cuarto, la *expertise* agrícola centrada en la producción de coca en comparación a otros cultivos lícitos (Devida, 2012; Zevallos, 2014;). Pese a ello, la realidad social de la zona contrasta con la dinámica de la economía ilícita. En Monzón, la pobreza y la pobreza extrema supera el ratio nacional; en

tanto, el índice de desarrollo humano en la zona es de los menores a nivel nacional (Devida, 2014).

Dicho contexto ha posibilitado la presencia de actores sociales que participan como agentes protectores y reguladores de la economía ilícita frente al accionar del Estado (Zevallos, 2014; Felbab-Brown, 2009). El primero de ellos corresponde a las organizaciones campesinas de defensa del cultivo de coca. La Poderosa Federación de Cocaleros del Valle del Monzón (PFCVM) ha sido reconocido como el gremio más importante de la zona del Alto Huallaga agrupando a cinco micro-organizaciones del Valle del Monzón. La “poderosa”, como lo llamaban los propios campesinos, ejercía poder sobre los gobiernos subnacionales puesto que generalmente los alcaldes del distrito de Monzón estaban adherido al gremio cocalero, o en todo caso terminaban por adherirse a la defensa de la coca evitando así represalias. En la arena también aparecen actores criminales. Diversas firmas locales del narcotráfico de la sierra de Huánuco y algunos grupos terroristas como Sendero Luminoso, también participaban en la dinámica de la defensa del cultivo ilícito frente a las políticas de control de cultivo del Estado peruano. El primer grupo surge como intermediarios útiles para la comercialización de la pasta básica y el clorhidrato de cocaína; los segundos aparecieron en la zona como mercenarios útiles para regular el flujo comercial entre ofertantes y demandantes de la materia prima (Zevallos, 2014).

Por la propia lógica de la economía ilegal, muchos actores, en algún momento particular de la actividad ilícita, podían cumplir acciones que lindaban con la criminalidad. Aunque la producción de coca ilícita no es una actividad penalizada, sí lo es la participación en actividades de comercialización de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína. De hecho, muchos campesinos cocaleros tienden a participar en la maceración de coca para su posterior lavado. Por otro lado, el escenario post-conflicto armado dejó evidencia de la dinámica social que se configuró en la zona del Alto Huallaga (CVR, 2003). Algunos campesinos de Monzón también tuvieron participación como agentes subversivos y como traficantes ilegales (Paucar, 2011). “Tierra de nadie”, “zona cercada”, “zona liberada”, eran algunas de las terminologías que empleaban los funcionarios públicos y pobladores aledaños del Monzón para calificar a dicho territorio y el poder de los grupos sociales defensores del cultivo.

Sobre este marco, el Estado peruano, condicionado por la normativa internacional, buscaba desde fines de los años 70 controlar el territorio para disminuir la producción de cocaína y el libre tránsito del TID. Aunque usualmente estas acciones fueron controladas por los grupos defensores del cultivo, es a partir del año 2012 que recién empieza a tener mayores avances y logros en dicho objetivo. ¿Qué tipo de acciones le permitieron al Estado controlar las acciones de defensa de los grupos sociales defensores de la economía de la coca? ¿Qué factores posibilitaron el alcance territorial del Estado en Monzón?

## **2. Aspectos metodológicos del estudio**

Para alcanzar los objetivos de este estudio, se ha realizado un trabajo de campo desde julio de 2013 a mayo de 2014 en la zona baja del valle de Monzón así como en los alrededores de la ciudad de Tingo María. Se ha procedido a utilizar técnicas del método cualitativo, específicamente 21 entrevistas semi-estructuradas a fin de recoger los testimonios de los

actores estatales y de la sociedad que participan en diversos escenarios de negociación para el control del cultivo ilícito de coca. Por otro lado, se hecho uso de la observación participante no intrusiva a fin de conocer las dinámicas de negociación y los discursos que emiten frente a frente. Se cierra la triangulación de fuentes con el recojo de información documental sobre el tema, específicamente archivos legales y documentos de gestión pública proporcionados por distintas instituciones del Estado y de la sociedad civil.

Se ha empleado el uso de seudónimos para proteger a las fuentes, o en todo caso se ha empleado terminologías generales para distinguirlos entre sí. El uso de categorías penales como “narcotraficantes”, “terroristas”, “criminales”, solo ha sido empleado por cuanto la documentación oficial así lo indica. Posteriormente solo se ha empleado categorías neutras.

### **3. Enfoque teórico: El control territorial del Estado desde una perspectiva relacional**

Guillermo O'Donnell (1993) llamó la atención sobre la existencia de "zonas marrones" en los territorios de los Estados latinoamericanos que las define como las regiones periféricas donde la presencia del Estado puede verse reconfigurada a través de formas atenuadas de poder. En dichos territorios se presentarían distintos tipos de retadores del Estado que generarán diversos desafíos a su autoridad para el libre ejercicio de sus políticas públicas (Soifer 2012), y en otros casos para retar al al propio régimen del Estado de Derecho (Eaton, 2012).

No todos los retadores aparecen en el territorio con la misma fuerza y el mismo objetivo frente el Estado (Eaton, 2012). Algunos retadores intentan generar autoridad monopólica en un territorio, por ejemplo los cárteles de la droga en Colombia. Otros en cambio buscan controlar y/o dinamizar el flujo comercial de ciertas actividades económicas ilegales, como los grupos armados, subversivos o escuadrones de la muerte que controlan el flujo comercial de estupefacientes. Finalmente, otros son retadores legítimos que defienden sus derechos marginados (Tanaka y Grompone 2009).

Sin embargo, la existencia de estas formas de poder retador no es el único factor que determina el escenario del alcance territorial del Estado. La literatura especializada ha demarcado cuando menos tres tipos de condiciones que explican la heterogeneidad del control estatal sobre su territorio: a) Incentivos económicos, por ejemplo cuando un Estado está interesado en controlar zonas donde existe un boom extractivo de materias primas (Tanaka y Grompone 2009), b) incentivos por la posición geográfica y magnitud demográfica del territorio, cuya presencia del Estado depende de la accesibilidad y la densidad poblacional (Baranyi, 2012;) y c) incentivos políticos, reflejado por un Estado interesado en construir alianzas con algún grupo retador a fin de verse favorecido políticamente frente a otro grupo retador (Shue, 1994; Boone, 2003). Lo importante de este asunto es que la configuración topográfica del poder estatal sobre un territorio se manifiesta por las diversas formas de interrelación entre las agencias del Estado y los diversos grupos sociales retadores, y los diversos incentivos de penetración territorial (Boone, 2003 y 2013; Migdal, 1994 y 2011).

Este trabajo parte por establecer un contexto donde el Estado si tiene incentivos (nacionales e internacionales) para intentar controlar su territorio y establecer autoridad frente a distintos

tipos de retadores. De ahí que en adelante la discusión se concentre en determinar las posibilidades del Estado para controlar ciertos territorios frente a distintos tipos de retadores.

Para lograr ello, la literatura contemporánea en protestas sociales (Grompone & Tanaka, 2009; Melendez, 2012; Durand, 2005) demuestra cómo es que muchas acciones del Estado tienden a ser rechazadas debido a una alta carga de racionalidad y unidireccionalidad en sus objetivos (Montecinos, 2007). Ejemplos comunes de esta situación se manifiestan en contextos de un Estado que intenta realizar privatizaciones, o desalojos forzados, etc. En algunos casos estas acciones estatales se ven limitados por las distintas estrategias formales e informales de los grupos sociales para generar resistencia (Zevallos & Mujica, 2013). De ahí que muchas veces se recomienda al Estado establecer canales de negociación y construcción de alianzas territoriales. Sin embargo, el problema con este tipo de recomendaciones es que se la presenta como una estrategia ideal de intervención estatal y por tanto requisito fundamental para la implementación de políticas públicas, lo que no necesariamente es aplicable en todos los contextos donde existe fuerte presencia de retadores estatales.

En esa punto, es posible determinar cuando menos tres tipos de explicaciones sobre la capacidad del Estado para implementar políticas de negociación en escenarios similares al que proponemos: (1) Un conjunto de textos que atribuyen el éxito de la implementación de una política a la capacidad de desarrollar estrategias que posibiliten incentivos y desincentivos económicos a los actores sociales (Huamaní, 2012); (2) Estudios estructurales que se concentran en la posición inicial de los actores en relación a la acumulación de recursos burocráticos: fuerza de Estado versus fuerza social (Arce, 2006; Arana, 2011); y, (3) Textos que rescatan la importancia del rol y las cualidades individuales de los actores en el proceso de construcción de alianzas políticas (Burneo & Chaparro, 2009; Revesz, 2013).

Si bien estos textos son aportes relevantes presentan limitaciones importantes: Primero, porque en líneas generales todos estos trabajos plantean una situación de ganador-perdedor en la búsqueda de alianzas, algo poco común en algunos contextos de política pública donde aparecen una diversidad de actores formales e informales del Estado y la sociedad (Eaton, 2012; Luna & Feldman, 2013). Segundo, porque de manera particular modelan eventos que implica el control racional de las situaciones; por ejemplo, los tipos de estudios (1 y 2) establecen una posición clara de los actores estatales y sociales, ergo una amplia capacidad de ambos actores para descifrar el comportamiento del otro en base a la distribución de expectativas o su fuerza burocrática, no obstante pierden claridad en un contexto donde aparecen múltiples actores con comportamiento y decisiones inciertas o confusas. Aunque el tipo de estudio (3) intenta cubrir estos vacíos a través de la presentación de marcos cognitivos de percepción social, dejan de lado factores externos como por ejemplo el contenido de la política que también son determinantes en el proceso de negociación. Así, a pesar de la diversidad de aportes, los estudios se han concentrado en explicar posibilidades de negociación pero en situación que están lejos de constituir un contexto real de conflicto entre actores, o bien intentan situar tipos ideales de comportamiento estatal.

Esta investigación sostiene más bien que es a través de las prácticas de dominación y transformación de los actores del Estado y la sociedad desde donde se puede determinar los factores que posibilitan la construcción de alianzas y negociación. En este escenario

relacional las organizaciones estatales y las fuerzas sociales construyen una relación intersubjetiva en torno a “la disposición de los recursos, la naturaleza de la estratificación de los actores y el contenido de sus identidades colectivas” (Migdal, 2011, 164). El resultado de esta redefinición de estructuras e intereses va a determinar las posibilidades y límites de la negociación ¿Qué factores posibilitan la construcción de alianzas y negociación? ¿Cómo es que se ponen en práctica en el contexto de implementación de políticas?

El control compartido sobre la política es la dimensión fundamental que explica las posibilidades de construcción de alianzas entre organizaciones estatales y sociales. Así, el poder del Estado en nuestro campo de estudio no se deriva de un sistema autónomo-legalista, sino desde dentro de las estructuras sociales, donde Estado y sociedad se transforman mutuamente (Migdal, 2004). En este campo de poder, las posibilidades de un juego negociación ganador – perdedor pierde pertinencia y se abre paso a un escenario de ganancias múltiples. La fuerza burocrática del Estado no es un asunto menor en este campo, sin embargo su lectura no debe ser establecida simplemente desde la acumulación de recursos (Boone, 2003), sino más bien desde su distribución a las estructuras sociales. ¿Qué tipo de determinantes se establecen sobre la base del control compartido de una política?

Esta investigación identifica tres tipos de determinantes:

- i) Política con alta carga de movilidad social: Las políticas públicas por lo general están cargadas de tensiones (Mahoney & Thelen, 2009), debido a que inevitablemente van a plantear un sin número de consideraciones de recursos (en muchos casos una alta cantidad de recursos) que invariablemente tendrán consecuencias distributivas. Así, cualquier conjunto de reglas o decisiones, formales o informales, tendrá implicaciones desiguales en la asignación de recursos. Muchas instituciones formales del Estado están destinados específicamente para distribuir recursos a algunos actores y a otros no (por ejemplo una agencia estatal dedicada a implementar políticas sociales), de ahí que en una dinámica de conflicto y coalición, estas siempre estarán vulnerables a cambios y a influir en la dinámica social de los actores sociales.
- ii) Consenso social de protección de intereses sobre la política: La diversidad de actores en un escenario de conflicto, estimulada por la carga de recursos y expectativas que genera la acción estatal, da pie para construir un espacio de negociación. Dependerá de cómo el Estado intente entregar parte del control de la política a los actores sociales con capacidad y fuerza al interior de su estructura, a fin de que estos puedan ayudar a su defensa y sobrevivencia (Perry, 1993).
- iii) Costo del rompimiento de negociación. Las fronteras que existen entre negociación y conflicto son muy finas, por tanto, el sostenimiento de alianzas también implicará un costo político. Así, el relativo control de la política por parte de algunas organizaciones sociales incrementará el costo político de romper las alianzas (Kasaba, 1994; Bratton, 2002).

#### **4. Caso de estudio: Revisando los cambios del proyecto estatal en Monzón**

Es a partir de finales de mediados de los años 70 que empiezan a generarse las acciones contra-narcóticas y de erradicación de cultivos en el Alto Huallaga, fruto de las nuevas

obligaciones estatales con la comunidad internacional y la normativa local. Anterior a ello, la zona de Tingo María fue considerada como uno de los *cluster* legales de producción de cocaína el cual abastecía a gran parte de países europeos y a los Estados Unidos (Gootenberg, 2003).

El registro histórico total de acciones estatales antidrogas hasta antes de los años 90 es limitado y escaso. Sin embargo, por documentación oficial (CVR, 2003) es posible inferir que las acciones antidrogas tuvieron una paralización desde mediados de los años 80 hasta inicios del año 2003, debido a que por esa época el Estado peruano concentraba todo su accionar a la lucha antisubversiva<sup>1</sup>. Durante los años 2003 a 2010 las acciones estatales tampoco fueron una constante. En dicho periodo se ha podido registrar cinco acciones de ingreso a Monzón para controlar el tráfico de insumos químicos y de derivados cocaínicos, determinando así que los operativos tuvieron un enfoque netamente de control de derivados cocaínicos:

**Cuadro N°1**  
**Operativos policiales de interdicción en Monzón (2003-2008)**

Año	Descripción del operativo
2003 Operativo Fierro	Por primera vez en el siglo 21, el Estado peruano decide ingresar al valle del Monzón para realizar acciones de incautación de drogas y erradicación de laboratorios clandestinos. Once helicópteros artillados de la Policía Aérea fueron la fuerza de choque del operativo estatal.
2004 Operativo Monzón 2004	El operativo duró cinco días y tuvo como objetivo destruir los laboratorios rústicos para la elaboración de PBC. Se destruyeron más de 125 laboratorios rústicos para la elaboración de Pasta Básica de Cocaína (PBC) y se neutralizó dos mil 500 kilogramos de ese estupefaciente en proceso de elaboración.
2005	El 17 de marzo se realizó un operativo helitransportado de interdicción al TID. Los sectores intervenidos fueron Maravilla, Consolado, Tazo Pampa, Puente Unión y Paccha, todos del distrito de Monzón.
2007 Operativo Huracán	La policía antidroga de Tingo María y la Dirección de Operaciones Especiales, DIROES, ejecutaron un operativo en las inmediaciones del caserío Soledad, en el que destruyeron seis laboratorios para la elaboración de pasta básica de cocaína.
2009 Operativo Detector	El Frente Policial Huallaga realizó incautaciones de estupefacientes en la carretera que une la ciudad de Huánuco con Ancash.

*Elaboración propia en base a diversas fuentes periodísticas*

No es posible afirmar que estos operativos hayan significado un control territorial del Estado, y es que según hemos podido registrar durante esa época sólo se realizaron actividades antinarcóticas, pero ninguna actividad de control del cultivo ilícito. Por ello, este tipo de

<sup>1</sup> Diversa documentación y textos publicados dan cuenta que en dicha época las acciones antisubversivas incluyeron torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos a los derechos humanos. Entre 1989 y 1993 las localidades afectadas del valle del Monzón fueron “Venenillo”, “Cuchara”, “Paraíso” y “Aries”.

acciones no necesariamente implicaron un reto a la fortaleza del gremio cocalero en Monzón y tampoco una desarticulación real de la presencia del narcotráfico y del terrorismo<sup>2</sup>:

El gremio cocalero en Monzón era reconocido por los propios cocaleros y funcionarios públicos como uno de los más fuertes gremios defensores de la coca. En vista de eso, recién a partir del año 2003, empezó a crecer el interés del Estado peruano por tratar de desarticular la relación que tenían estos actores con los grupos subversivos y narcotraficantes. En el año 2010 el servicio de inteligencia y la dirección antidrogas de la policía (Direjandro), hicieron su ingreso al valle del Monzón capturando a varios campesinos cocaleros, dirigentes gremiales, y autoridades públicas, acusándolos de estar coludidos con el narcotráfico y con el terrorismo en la producción de cocaína. Meses después, un gran porcentaje de estas personas fueron liberadas, en tanto que Artemio, principal líder terrorista de la zona, fue capturado en el año 2012 en una localidad cercana a Tocache. A partir del año 2012 el Proyecto Especial del Alto Huallaga (Corah) iniciaría las acciones de erradicación de cultivos, proceso que duraría hasta principios de enero de 2013.

Si bien es cierto que éste último ingreso estatal al Monzón posibilitó cierto espacio para que el Estado pueda controlar el territorio, no necesariamente se pudo detener la producción de coca<sup>3</sup> y tampoco los proyectos de desarrollo alternativo alcanzaron grandes impactos<sup>4</sup>. Asimismo, el gremio cocalero empezó a reestructurarse y la presencia de agentes del narcotráfico y del terrorismo no necesariamente desapareció.

En resumen, lo que tenemos hasta aquí era una política antidroga en Monzón que no había variado a las acciones desplegadas en otras zonas cocaleras. Si bien se había dado un golpe importante al terrorismo, y se había capturado a dirigentes cocaleros, que en algunos casos conectaban con redes del narcotráfico, la situación del flujo comercial de coca y cocaína no había variado mucho. El gremio se había reorganizado y en el gobierno municipal de la zona había asumido como alcalde un ferviente protector de los cocaleros. Sin embargo, las posteriores acciones del Estado posibilitaron un cambio de régimen relacional con los campesinos cocaleros, y por tanto un control más efectivo del territorio y de la producción del cultivo ilícito. ¿Qué factores posibilitaron establecer un escenario de negociación entre el Estado y los campesinos cocaleros para la implementación de la política pública de control de cultivo y adopción de proyectos sociales?

---

<sup>2</sup> Diversos informes de inteligencia referenciada en medios de prensa daban cuenta del asentamiento del camarada senderista “Artemio” en la zona del Monzón, cuya relación con el narcotráfico y algunos miembros del gremio cocalero hacía del territorio una zona protegida para la libre producción de coca y cocaína.

<sup>3</sup> Sin embargo, debe quedar claro que es a partir del 2013 que el Alto Huallaga deja de ser el territorio con mayor producción de coca para dar paso al VRAEM como la zona de mayor producción.

<sup>4</sup> Aunque parecido al modelo de desarrollo alternativo, los proyectos de PIRDAIS no tenía los mismos elementos de intervención, enfocándose netamente a la distribución de dinero a los gobiernos subnacionales para proyectos básicos de cultivos alternativos e infraestructura comunal. Debe considerarse que anteriormente los programas de desarrollo alternativo implementados en otras zonas cocaleras habían tenido diversos resultados: la efectividad del modelo San Martín había sido estipulado a las acciones de la cooperación internacional, mientras que el proyecto piloto en Huipoca resultó un fracaso detenido por la marcha cocalera

#### 4.1 Insumos y acciones para la movilización de actores

Por lo general la política antidroga en Perú está cargado de dos elementos estratégicos: 1. La erradicación de cocales e interdicción de insumos cocaínicos y 2. Proyectos de desarrollo alternativo. Este tipo de acciones estatales, no obstante, ya era conocido por los campesinos cocaleros quienes, por experiencia pasada, tenían conocimiento sobre los problemas de implementación de la política (promesas incumplidas, rentabilidad de la coca frente a proyectos no ilícitos, inversión norteamericana, entre otras). Sin embargo, a partir de mediados de 2012 Devida establece una nueva estrategia denominada “Plan de Post-erradicación”, el cual, aunque presentaba una alta incidencia en el control del cultivo, en paralelo proponía otros elementos que no siempre fueron establecidos en anteriores programas de desarrollo alternativo.

La nueva estrategia no obligaba al campesino a participar en los proyectos de cultivo alternativo aunque de hacerlo se les obligaba a dejar de producir coca en el mismo terreno. Los cultivos alternativos se concentraban en cacao y café (cosecha de 1 año), además de biohuertos (cuya cosecha es de tres meses). En esa misma línea, se les proporcionó a los campesinos capacitación agrícola para la recuperación de terrenos y buenas prácticas de cuidado ambiental. Asimismo, se posibilitaba la formalización de juntas vecinales para la seguridad social del Monzón (que implicaba capacitación y entrenamiento en programas de gestión social). Aunque no se limitaba el papel de los gremios cocaleros en la organizacional social, si se fortalecía la autoridad de los agentes municipales y los tenientes gobernadores (considerando que estos habían sido designados por la misma población). Al gobierno local, abiertamente a favor de la reivindicación cocalera, se le amplió el número de transferencia presupuestal para proyectos de desarrollo social. En el aspecto social, se procedió a brindar plataforma para el acceso de pobladores a programas sociales al margen de participar en proyectos productivos alternativos. En esa misma línea, aparece la experiencia de las caravanas de salud donde se atendía a niños y ancianos con problemas de salud, además de la visita cotidiana de agentes al cuidado de lavado de manos, quienes se hospedaban en casa de algunos campesinos.

Según lo explican los propios funcionarios de Devida, se piensa que este tipo de actividades aunque no necesariamente va a detener el cultivo de coca ilícito por completo, si iba a ayudar a mantener una relación más “armoniosa” del Estado con los campesinos cocaleros, ya que “por siglos el Estado desapareció por aquí, la gente no creía, y peor si le erradicas su coca (...) Ahora ya algo creen” (Yesica, funcionaria del Estado).

Sin embargo, este tipo de acciones de política no estuvo ajeno de críticas por parte de campesinos cocaleros y agentes del gremio. Por largos años, muchos campesinos cocaleros construyeron un discurso de defensa de la coca en base al desprestigio de las acciones estatales de control de cultivo y de desarrollo alternativo: “entonces ellos decían: ¡cocalero! ten dignidad, te van dejar pobre y solo, ahí te vas morir, ¿cómo vas a vivir? (Job, campesino cocalero)

Ciertamente, este discurso no estuvo ajeno a experiencias pasadas vividas por otras comunidades campesinas dedicados a la coca. Una de las mayores quejas que presentaban los campesinos a favor del cultivo de coca era la del incumplimiento del Estado peruano en

las acciones prometidas, de la corrupción que acechaba a los funcionarios públicos que manejaban los recursos públicos.

Toda la vida ha sido siempre así. Ellos han venido a sacar la coca y te prometen el oro y el moro, y luego no cumplen. ¿La gente que va hacer?, ¿morirse? (...) ellos tienen plata el Estado tiene plata, además está la plata de los Estados Unidos, nosotros sabemos que hay una partida de más de 7 millones para Monzón, ¿dónde está esa plata, quién se lo agarra? (Alberto, campesino de Monzón)

Para otros, en cambio, sí habría la posibilidad de dejar de producir coca siempre y cuando el Estado subvencione económicamente las ganancias que se obtenía de la comercialización del producto ilícito, tal y como se hizo en otros contextos de intervención.

Yo escuché pues cuando el Ollanta (presidente del Perú) dijo que nos iban a erradicar, yo no creí, pero bueno, ahora vienen con apoyo, ojalá sea cierto. (Apac, campesina de Monzón)

Debe reconocerse que es muy común que por estas zonas cocaleras exista un discurso de los campesinos cocaleros de que ellos solo se dedican a cultivar coca y no necesariamente producen drogas. Pese a ello, muchos campesinos asumen con claridad que el tipo de actividad que realizan tiene una conexión muy fina con la producción de cocaína, lo que posibilita cierta comprensión de las acciones del Estado. Si bien estaban en desacuerdo con la erradicación de coca, también saben que el Estado debe garantizar paliativos sobre dicha acción.

Es por ello que los funcionarios de Devida, cada vez que organizaban reuniones comunales con los campesinos cocaleros hacían énfasis en el interés del Estado por protegerlos; pero al mismo tiempo trataban de evitar a toda costa mencionar sobre las actividades de erradicación de coca. Desde ese momento, el Estado empezó a tener varios matices: el Corah eran los “erradicadores”, y Devida era “el desarrollo”. Establecer este tipo de discursos no fue fácil. De hecho, muchas veces los funcionarios fueron rechazados por los campesinos y acusados de formar parte de los erradicadores de coca.

Uno llegaba para enseñarles, pero bueno por la erradicación ellas tenían cólera pues, y a veces no querían saber nada con nosotros. Les decíamos que no éramos del Corah, ya después te aceptaban, les explicábamos clarito lo que íbamos a ser y ya te decían, ingeniero no nos falles. (Celis, funcionario del Estado)

Nosotros decimos que somos el Estado peruano, pero tratamos de hablar poco de erradicación, nosotros hablamos sobre desarrollo ya que eso es Devida. (Alfonso, funcionario del Estado)

De igual manera, se trató de desvincular con las instituciones de la cooperación internacional. La idea era evitar los reclamos de parte de los campesinos sobre la cantidad de recursos que el gobierno de Estados Unidos dispone para el control del cultivo ilícito. De esa manera, en Devida se estableció que en Monzón, tanto los funcionarios del Estado como de la

cooperación internacional (especialmente USAID) mencionaran que formaban parte del Estado peruano y de Devida.

Ellos se averiguan todo y nos decían ingeniero pero nosotros sabemos que aquí hay plata de los estados unidos, qué se hace con esa plata. Yo les decía pero todo es del Estado. A veces me creían. (Sergio, funcionario del Estado)

Lo importante de este asunto es que la nueva estrategia del Estado despertó expectativas importantes en algunos pobladores de Monzón, quienes, a pesar de todo, tenían la posibilidad de generar resistencias con al gremio cocalero, y sin embargo, esto no sucedió. ¿Qué posibilitó que la política de control se mantuviera intacto?

## **4.2 Construyendo la defensa social de las acciones del Estado**

Las acciones realizadas por Devida en Monzón no estuvo ajeno de enfrentamientos construido por algunos campesinos cocaleros, muchos de ellos pertenecientes al gremio. Sin embargo, a diferencia de otros contextos, esta vez el proyecto estatal sí pudo alcanzar mecanismos de defensa social. De hecho, se señaló anteriormente que el gremio cocalero en Monzón era reconocido como uno de los más fuertes y cohesionado en la zona del Huallaga, sin embargo, esto cambió con la nueva estrategia de la política, donde muchas madres y campesinos mostraron su interés para que el proyecto continuara, pese a lo estipulado formalmente por el gremio. Sobre ello, hemos podido identificar cinco acciones de defensa y protección local que realizaron algunos campesinos para que el proyecto del Estado permanezca en la zona:

Primero: Los campesinos a favor del proyecto empezaron a construir un discurso de afrenta ante el gremio cocalero. Ellos señalaban que el gremio les había fallado en relación a la promesa de que en Monzón nunca se iba a erradicar cicales, algo que finalmente sucedió en el 2012. Los campesinos adheridos al gremio, por largos años aportaron mensualmente a la sostenibilidad económica de dicha organización, entre otras cosas, para desarrollar una estrategia de defensa del cultivo:

“Ellos también nos fallaron, nos decían que aquí no se erradica, pero igualito me sacaron la coca, yo me quedé llorando (...) luego (el gremio) nos decían no te preocupes ahorita hacemos paro, nos vamos hasta el congreso. Pero hasta ahorita nada”. (Mirta, campesina de Monzón)

Segundo: De igual manera, también empezaron a construir un discurso crítico frente a la administración pública local (2013), situándose exclusivamente a la débil protección social que tuvo el gobierno local de Monzón cuando ocurrió el ingreso de la policía, y posteriormente, al finalizar la erradicación:

Se llenaba la boca diciéndonos hermanos aquí no va a pasar nada, mentira. Yo he ido personalmente a gritarle que ahora que vamos hacer y lo único que dice que la culpa es del gobierno, pero no nos da él soluciones. Se supone que tú eres alcalde, tú debes velar por el pueblo. (Niger, campesino cocalero de Monzón)

Tercero: Los campesinos empezaron a proteger las actividades realizadas por los funcionarios de Devida, defendiéndolos frente a otros pobladores que aún tenían interés para que los cocaleros rechacen la nueva política de erradicación. ¿Cómo se logró? Pues a través de una penetración en las dinámicas sociales de los campesinos por parte de los funcionarios de Devida.

Una vez que el proyecto de Devida empezó a implementarse, una de las cosas que mayor preocupación tenían los funcionarios públicos era el de proteger su propia integridad. Sobre todo para aquellos funcionarios “prospectores de campo” (ingenieros agrícolas) quienes se desplazaban por largos trayectos hasta llegar a los terrenos erradicados de coca donde se iba a sustituir con semillas alternativas. Para evitar esto, los prospectores de campo decidieron permanecer por largas semanas conviviendo con los campesinos, compartiendo faenas laborales y familiares.

Quando vas al inicio te miran con recelo y se quejan de por qué les quitaron la coca y que se quedaron pobres, pero una vez que ya ven que empezamos a mejorar la tierra y que llegan pues los materiales para trabajar, la semillas, entonces ya te tratan mejor. (Pedro, funcionario del Estado)

No son malas personas, te tratan bien, te dan comida, hasta masato. Cuando ya vuelves te saludan. Ingeniero, pase cómo está, te dicen. Eso ayuda pues a ganar confianza. (Juan, funcionario del Estado)

De igual manera sucedió con aquellos funcionarios que se desplazaban hacia los distintos caseríos de Monzón para impartir clases de cuidado de la salud familiar. El objetivo de estas acciones era el de enseñar a las madres de familia y a sus hijos al cuidado sanitario del cuerpo y las manos, ya que en dichas zonas, el contacto cotidiano con productos agrícolas no saneados, tendía a generar enfermedades gastrointestinales a la población.

Este tipo de rechazo cambiaría luego que los funcionarios de Devida decidieran ejecutar este tipo de actividades posterior a la visita médica que tenían algunos campesinos y sus hijos por consulta de tratamiento para enfermedades crónicas. De esta manera, les fue posible extender su servicio público como si formase parte del tratamiento médico.

Empezamos a ir más seguido, muchas veces hasta nos daban alojamiento y comida. Entonces les enseñábamos a las mamás sobre lavarse las manos antes de preparar los alimentos, o cuando van a amamantar a sus bebés (Marco, funcionario del Estado)

Las señoritas que vienen si nos enseñan a cómo preparar mejor la comida, a arreglar la casa. Nos dicen cómo ayudar a nuestros hijos (Apac, campesina del Monzón)

Ahora, si bien este tipo de medidas formaban parte del paquete de acciones de Devida, también es cierto que este tipo de acercamientos fueron aprovechados por los funcionarios para difundir discursos de defensa de los proyectos del Estado.

Cuando me decían que somos malos que les quitamos su coca, yo le decía pero mírate cómo estas tú, tus hijos, que has ganado con la coca, igual sigues de pobre, si o no. Si pues me decían. (Pedro, funcionario del Estado).

Ellos por lo general no trabajan mucho, porque con la coca ya se sentían seguros de tener plata, pero se lo gastaban rápido, ahora yo les digo, ahora si vas a trabajar pero el Estado te va a apoyar a ti y a tus hijos. (Abel, funcionario del Estado)

Cuarto: Hasta el cierre de este estudio, el Corah había erradicado alrededor de 23 mil hectáreas de coca en Monzón (UNODC, 2014). A pesar que las actividades de desarrollo alternativo ya estaba operando para aquellos pobladores que decidieron adoptar el cambio de producción agrícola, en ocasiones, algunos agricultores, intentaron compartir espacio de terreno agrícola para sembrar almácigos de coca. Este tipo de acciones era una preocupación latente para los funcionarios de Devida ya que de mantener esta situación, el proyecto de sustitución agrícola podría verse afectado.

Esto es un asunto difícil de controlar, el apoyo de Devida es de largo plazo y la gente necesita sembrar cosas rápido. (Abel, funcionario del Estado)

Si es verdad que sucedieron estos hechos en Palo de Acero (caserío), pero no es que no lo supiéramos manejar. Para eso tenemos ingenieros de campo que continuamente nos avisan, pero incluso también los propios agricultores. (Ángela, funcionaria del Estado)

En esa línea, muchos campesinos representantes de los caseríos, señalaban que cada vez que se detectaba la presencia de almácigos en algunos terrenos predestinados a los proyectos de Devida, invitaban a dichos pobladores a retirar dicha plantación en menos de 24 horas, de lo contrario ellos mismos iban a intervenir en la destrucción de dicha parte del terreno.

Uno comprende a la población, porque uno también es parte del Monzón, aquí vivimos. Pero pienso que si ya dimos nuestra palabra al Estado, específicamente a Devida para trabajar con los proyectos que ellos nos brindan, no está bien que abusemos de esa confianza. (Celso, campesino de Monzón)

Quiero resaltar que aquí en Sachavaca, cuando hemos sabido que hay presencia de almácigos, hemos avisado a la persona y le hemos dicho que por favor lo retire y así lo han hecho. No ha habido problemas... Si no lo hubieran hecho, pues allí si teníamos que tomar medidas más drásticas para no perjudicar por uno a toda la población. (Dilmer, campesino de Monzón)

En otros casos, los campesinos construyeron un discurso de pertenencia y exclusión territorial para señalar que los que siembran son personas “ajenas al pueblo”.

Mira vé, esa gente que siembra aquí no es parte del Monzón pues, no nace aquí, solo vienen a sembrar coca. No es la gente de Monzón misma. Yo pienso que nosotros como pobladores debemos empezar a invitarlos a salirse del pueblo, para que no digan después que la gente de Monzón incumple. (Luis, campesino del Monzón)

Quinto: Según muestra la información documental recogida sobre Monzón, por largos años el gremio cocalero y el grupo armado de Sendero Luminoso, fueron los líderes autorizados para decidir sobre el interés del pueblo del Monzón. Esto cambia con la caída del grupo terrorista y con la debilitación del gremio tras la operación eclipse en 2010. Devida aprovechó esta situación para revalorizar el papel de los tenientes gobernadores y los agentes municipales como voceros oficiales de los caseríos.<sup>5</sup> Ambos tienen la función de generar nexos entre la población, Devida, el gobierno distrital y demás agencias del Estado.

Desde hace un año he asumido como teniente gobernador y mi función va en coordinar aquí con la población para trabajar con los proyectos del Estado (Marco, funcionario del Estado).

Si estamos apoyando en la idea de generar desarrollo con Devida ya que en estos momentos nuestro pueblo ha quedado en total desamparo fruto de la erradicación...Si, también estamos participando en juntas vecinales (Laura, funcionaria del Estado).

En la práctica, estos dos intermediarios se encargan de viabilizar los pedidos y quejas que tienen los pobladores en relación a los proyectos de Devida. De hecho, previo al inicio de los proyectos del Estado, Devida hizo firmar a cada caserío y/o comunidad de Monzón un “acta de Entendimiento” donde ambas partes se comprometen a respetar los acuerdos planteados (entre ellos el de no volver a sembrar coca en el área pre-establecido, y el de exigir y denunciar ante el Estado si es que no cumple con sus obligaciones prometidas). De esa manera, en varias oportunidades, el agente municipal o el teniente gobernador se acercaban a la oficina descentralizada de Devida en Tingo María para solicitar mayor esfuerzo del Estado.

Si la vez pasada fui porque había cierta molestia de la población de que algunas semillas no estaban llegando a tiempo. Ellos (Devida) ya me dijeron que en quince días estará llegando el paquete, así que vamos a esperar. Voy a comunicar a la población. (Niger, campesino de Monzón)

Lo bueno es que ahora uno sí puede ir a conversar con la autoridad de Devida. A veces hay gente que me dice para qué vas a Tingo María vamos de frente a Lima, pero yo le digo, oye pero para qué, espérate pues un ratito, pasemos cada instancia. Ya si no nos solucionan vamos a Lima (...) La gente quiere reaccionar rápido porque así estaba acostumbrada con el gremio, de frente marchas. Yo les digo, no nos peleemos, vamos paso a paso, poco a poco nos están cumpliendo. (Alberto, campesino del Monzón)

Lo relevante de esta idea es que la presencia de estos dos funcionarios públicos funciona como autoridades reconocidas por la población, y aunque no necesariamente ejercen un liderazgo vertical en la población, sí pueden desarrollar espacios para el control social de las demandas de la población frente al Estado.

---

<sup>5</sup> La presencia de ambos actores está normado por la ley orgánica de municipalidades del Perú.

### 4.3 Ganadores múltiples e intereses equilibrados

En esta sección buscamos responder a la pregunta ¿Cómo se explica que el proyecto del Estado obtuviera capital político para que su despliegue fuese aceptado y defendido por una fuerte base social de campesinos de Monzón? Sostenemos que tanto Devida como los campesinos que aceptaron participar de los proyectos estatales lograron equilibrar sus intereses y pérdidas sobre la política implementada. Para que sucediera esto, cada actor interesado logró acceder a parte del control de la política pública. La anulación o paralización de la política hubiese implicado que ambos actores se vieran perjudicados sobre las actividades ya implementadas y del cuales algunos ya empezaban a beneficiarse.

En el caso de los campesinos se argumenta que:

i) Las acciones de post erradicación implementados por Devida, y otras entidades del Estado, aseguraba seguir manteniendo distancia con el poder del gremio cocalero. De hecho, uno de los problemas que señalan los campesinos es que si bien el gremio cocalero brindaba seguridad para la producción de coca, el trato que tenían para con ellos no era el ideal.

Ellos se creían como los intocables, era la poderosa pues, nosotros les pagamos una cuota mensual pero cuando llegó la erradicación nos fallaron. (Celis, funcionario del Estado)

Si me han dicho que ahora con el cambio de gobierno que la federación se va a reorganizar, pero me piden más plata, y que van a defender nuestra coca. Yo no sé si creerles, además ya estoy trabajando café. (Apac, campesina de Monzón)

ii) Por otro lado, si bien Devida obligaba a los campesinos a no volver a sembrar almácigos de coca en terrenos seleccionados, muchos campesinos tenían la oportunidad de continuar sembrando coca, aunque en menor densidad, en zonas alejados de Monzón, y donde Devida no presenta restricción alguna.

Si hay gente, tu sabes, que no tiene qué comer, y bueno siembran como sustento pues, hasta que lo del café salga. (Pedro, campesino Monzón)

Nosotros les decimos que siembren coca, pero sí que solo vamos a ser exhaustivos con los terrenos que ellos están seleccionando y siendo verificados por los prospectores de campo. Incluso, si ellos siembran en otros lados, bueno le hemos dicho que quizás en el futuro el Corah pueda volver a erradicarlo, eso es seguro. Ya es cosa de ellos. (Alfonso, funcionario del Estado)

iii) Los campesinos veían con interés las distintas acciones que Devida desplegaba en su programa de desarrollo alternativo, sin embargo, dos de ellas lo consideraban como fundamentales y diferentes. Las madres de familia por ejemplo consideraban que las caravanas de la Salud de Devida y su programa de reforzamiento de personal médico con el Ministerio de Salud era un apoyo importante para sostener la salud de ellas, sus esposos e hijos.

Si ayuda bastante porque antes no había muchos médicos, cuando mi esposo se enfermaba yo tenía que reemplazarlo en la chacra, y con quien dejaba a mi hijo. (pa, campesina de Monzón)

Mira eso es bueno porque hay muchas zonas de monzón Alto, incluso donde allí hay coca que dicen que esto es bueno, e incluso nos piden más. Ingeniero traigan más caravanas. Yo le digo, pero depende de ustedes pues de sus autoridades que soliciten. (Alfonso, funcionario del Estado)

De igual manera, los campesinos hombres veían con gran entusiasmo el acompañamiento de los ingenieros agrícolas en el cultivo de los productos alternativos de Devida, beneficiándose de la capacitación en buenas prácticas agrícolas, y de los insumos para recuperar los terrenos maltratados por el cultivo de coca.

Yo creo que si ha sido importante que el Estado brinde insumos pues para recuperar nuestra tierra y para cuidar el cultivo de cacao en mi caso. Antes pues nunca llegaban y a veces la cosecha (de coca) se perdía por la seca (enfermedad de la planta de coca). (Pedro, campesino de Monzón)

iv) Por último, la acumulación de actividades sociales promovidas por el Estado, y el debilitamiento de actores vinculados al gremio cocalero, posibilitó que parte de la población de Monzón pueda percibir cierto quiebre con los estereotipos y señalamientos que recibían por parte de otros pobladores al pertenecer a una zona de producción de cocaína. De hecho, por largos años se construyó en dicho territorio discursos que satanizaban la actividad de los campesinos cocaleros: “ociosos”, “borrachos”, “delincuentes”, “bravos” eras algunos de los calificativos reconocidos por funcionarios públicos, y por los pobladores de Tingo María (zona establecida al pie del valle del Monzón).

Yo creo que con esto ya pues no nos van a mirar mal, nosotros no le hemos robado a nadie, pero la gente así es, hablan. (Dilmer, campesino de Monzón)

Dicen que ha habido tios y narcos, dicen, pero bueno, habrá habido, pero ahorita ya no hay. No se ve. (Celso, campesino de Monzón)

Por otro lado, desde el Estado también se percibía cierto equilibrio de intereses por la forma cómo se desplegaba la política de control de cultivo ilícito. Si bien las acciones que se implementaban no necesariamente cumplían con todos los objetivos estipulados en el plan de lucha contra las drogas, en la práctica, los funcionarios de Devida pensaban que al menos se podría obtener la confianza de un grupo de pobladores de Monzón. Romper con esta lógica hubiese significado generar mayores alcances para la conflictividad y rechazo social.

Si bien el pacto que realizaba Devida con parte de la población de Monzón para dejar de sembrar coca no necesariamente fijaba el abandono total de sembrío de coca, este tipo de permisibilidad tácito favorecía en la generación de confianza con la población, pues de esa manera se trataba de cubrir las debilidades de entrega inmediata de los proyectos del Estado, y se limitaba la producción de coca en Monzón.

Tampoco se puede dejar a la población sin recursos, la idea es que mientras vayan llegando los proyectos ellos van abandonando la coca. Ya no les va a dar tiempo. (Sergio, funcionario del Estado)

Esta gente siempre ha estado acostumbrado a cosechar coca, ahora que uno entre con otros cultivos y demás acciones, eso les impacta. Poco a poco van a salir eso, se van a dar cuenta de cómo cambia la cosa. (Alfonso, funcionario del Estado).

## **5. Conclusiones:**

Cotidianamente el Estado peruano se enfrenta a diversos desafíos territoriales de seguridad que ponen en cuestionamiento su capacidad y la calidad de sus intervenciones frente a distintos poderes locales. En el territorio se puede encontrar una diversidad de grupos retadores legítimos y no legítimos con diversos intereses y mecanismos para replegar las acciones estatales. Sobre este asunto, la literatura sobre protestas sociales ha hecho énfasis en la necesidad de construir alianzas entre Estado y sociedad y así evitar escenarios de conflictos y convulsión. No obstante, poco se ha dicho sobre las condiciones que favorecen a la construcción de dichos escenarios de negociación.

El caso de estudio sobre la estrategia antidrogas del Estado peruano en el valle del Monzón posibilita vislumbrar una primera aproximación a los estudios sobre el alcance territorial en zonas controlados por diversos actores retadores del Estado: terroristas, narcotraficantes, campesinos cocaleros. En dicho escenario se puede observar cómo es que la posibilidad de construir alianzas parte de la capacidad de algunos actores estatales y de la sociedad para generar acciones que permiten, siguiendo la línea de Migdal (1994) la dominación mutua y el equilibrio de sus intereses. ¿Cómo se logra esto? Pues a través de tres condicionantes: primero, estableciendo una estrategia que permitan la movilidad efectiva de actores sociales a fin de establecer cambios de percepción sobre la presencia del Estado en el territorio. En segundo lugar, posibilitando que dichas acciones estatales permita generar afectación útil en el grupo social; por ejemplo, en el caso de los ex cocaleros en Monzón, la idea de obtener conocimiento sobre tecnología agrícola de manera extendida fue un aliciente importante para que, sin dejar de criticar la política de erradicación de coca, aceptara continuar trabajando con Devida. Asimismo, permite debilitar la cohesión social entre los grupos retadores y clarificar sus intereses. Muchos campesinos por ejemplo estuvieron decepcionados del papel del gremio cocalero ya que posterior a la erradicación no hubo medidas para paliar dicha situación. En tercer lugar, una política que no intente controlar todas las actividades sociales, brinda la posibilidad para que algunos grupos sociales tomen mayor libertad sobre la misma. Aunque en otros contextos esto parecería demostrar debilidad por parte del Estado, en Monzón se puede observar que más bien esta idea posibilitó obtener mayor capital político para que el Estado pueda continuar con los proyectos de control de cultivo.

Lo importante de este último punto es que dicho control relativo genera que los grupos sociales, y el Estado, obtengan mayores beneficios e intereses sobre la forma cómo se despliega la política pública, y por tanto se incrementa el coste social de romper las alianzas.

De esa manera, la alianza social queda supeditada a un interés mutuo, donde todos los actores mantienen ganancias relativas, y la política pública mantiene su cauce.

## 6. Referencias

- Allen, C. (2005). *An Industrial Geography of Cocaine. Latin America Studies*. United States: Routledge.
- Arana Zegarra, M. A. (2009). *Resolución de conflictos medioambientales en la microcuenca del río Porcón – Cajamarca 1993-2002. Tesis de maestría*. Lima.
- Arce, M. (2006). *El fujimorismo y la reforma del mercado en la sociedad peruana*. Lima: IEP.
- Azarya, V. &. (1987). Disengagement from the State in Africa: Reflections on the Experiences of Ghana and Guinea. *Comparative Studies in Society and History*, 29(1), 106-131.
- Baranyi, S. (2012). Contested statehood and state building in Haiti. *Revista de Ciencia Política*, 32(3), 723 – 738.
- Boone, C. (2003). *Political Topographies of the African State: Territorial Authority and Institutional Choice*. United Kingdom: Cambridge Studies in Comparative Politics.
- Boone, C. (2012). Territorial Politics and the reach of the state: Unevenness by design. *Revista de Ciencia Política*, 32(3), 623 – 641.
- Bratton, M. &. (1994). Neo-patrimonial Regimes and Political Transitions in Africa. *World Politics*, 46.
- Bratton, M. (1989). The Politics of Government-NGO Relations in Africa. *World Development*, 17(4), 569–587.
- Burneo, M. L. (2009). Más allá de lo local: procesos de negociación en contextos mineros. El caso de la comunidad campesina de Michiquillay. *Argumentos*(3).
- CICAD. (2013). *El problema de las drogas en las Americas: la economía del narcotráfico*. Washington: OEA.
- Durand, A. (2005). El movimiento cocalero y su (in)existencia en el Perú. Itinerario de desencuentros en el río Apurímac. *Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines*, 34(1), 103-126.
- Eaton, K. (2012). The State of the State in Latin America: Challenges, Challengers, Responses and Deficit. *Revista de Ciencia política*, 32(3), 643 – 657.
- Felbab-Brown, V. (2010). *Shooting up: Counterinsurgency and the War on Drugs*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.
- Giraudy, Agustina; Luna, Juan. (2012). *An Explanatory Typology of State’s Territorial Reach: State actors and territorial challengers in Latin America*. New Orlands: APSA.
- Gootenberg, P. (2008). *Andean Cocaine: The Making of a Global Drug*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Green, E. (2012). On the Size and Shape of African States. *International Studies Quarterly*, 56(2), 229–244.
- Grompone, R. &. Martin Tanaka (2009). *Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social*. Lima: IEP.
- Huamani, G., & al, e. (2012). *Hacia una mejor gestión de los conflictos socioambientales en el Perú*. Lima: CIES.
- INEI. (2009). *Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009*. Recuperado el 2014, de <http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/INEI-Mapa-Pobreza-2009.pdf>

- Kasaba, R. (1994). A time and place for Nonstate: Social Change in the Ottoman Empire during the Long Nineteenth Century. En K. & Migdal, *State Power and Social Forces*. New York: Cambridge University Press.
- Krasner, S. (1984). Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics. *Comparative Politics*, 227(6).
- Luna, Juan & Feldman, Andreas. (2013). *Mapping State-Challenger Interactions In Contemporary Latin America Through Insign From Theoretical Ecology*. New Orlands: APSA.
- Mahoney, James & Thelen, Kathleen. (2009). *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Mann, M. (1991). *Las fuentes del poder social I*. Madrid: Alianza.
- Melendez, C. (2012). *La soledad de la política. Transformaciones estructurales, intermediación política y conflictos sociales en el Perú (2000 – 2012)*. Lima: Mitin Editores .
- Migdal, Joel; Kohli, Atul & Vivienne Shue. (1994). *Power and Social Forces: Domination and Transformation in the Third World*. United Kingdom: Cambridge Studies in Comparative Politics.
- Montecinos Montecinos, E. E. (2007). Límites del enfoque de las políticas públicas para definir un problema público. *Cuadernos de Administración*, 20(33), 323-335.
- Mujica, J. (2007). *Estrategias locales de acceso a la telefonía móvil. Funciones y estructuras del mercado informal en un espacio de escasos recursos*. Lima: DIRSI.
- O'Connor, D. (2009). The political economy of Colombia's Cocaine Industry. *Papel Político*.
- O'Donnell, G. (2003). "On the State, Development, and some Conceptual Problems: A Latin American View with Some Glances at some Post-Communist Countries". *World Development*, 21, 1355-1369.
- Paucar, F. (2015). *La Guerra Oculta en el Huallaga, Monzón y Aguaytía*. Tingo Maria: CEDAI.
- Perry, E. (1993). *Shanghai on Strike: The Politics of Chinese Labor*. Stanford: Stanford University Press.
- PNUD. (2013). *Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013. Cambio climático y territorio: Desafíos y respuestas para un futuro sostenible*. Recuperado el 2014, de <http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/Informesobredesarrollohumano2013/I DHPeru2013/>
- CVR (2003). *Los escenarios de la violencia*. Lima: República del Perú.
- Revesz, B. (2013). *Miradas cruzadas: políticas públicas y desarrollo regional en el Perú*. Lima: IEP.
- Schelling, T. (1981). *The Strategy of Conflict*. United States: Harvard University Press.
- Shue, V. (1994). State Power and Social Organization in China. En K. a. Migdal, *State Power and Social Forces: Domination and Transformation in the Third World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sloan, J. (1984). *Public Policy in Latin America: A Comparative Survey*. Pittsburgh: University of Pittsburgh.
- Soifer, H. (2008). "State Infrastructural Power: Approaches to Conceptualization and Measurement". *Studies in Comparative International Development*, 3-4(43), 231-251.
- UNODC. (2014). *World Drug Report 2014*. United States: UNODC.
- Zevallos, N. & Jaris Mujica (2013). Consideraciones sobre las tensiones en la intermediación política del movimiento cocalero en el Perú. *Debates en Sociología*(38), 5-28.
- Zevallos, N. (2014). Hoja de coca y la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007 – 2011: el problema público en el control de cultivos. *Revista de Ciencia Política y Gobierno*, 1(1), 97-113.